



## Posicionamiento de la Sociedad Civil ante el IV Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de CEPAL

### *América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030*

La constitución del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en el III Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en el 2018, fue un avance importante, pero no suficiente para que se cambie la metodología y espíritu del Foro para asegurar el diálogo entre representantes de gobiernos y de sociedad civil de manera significativa. Los Estados de América Latina y Caribe están lejos de cumplir con los 17 Objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, siguen evadiendo escuchar desde la sociedad civil, dónde están las brechas que se deben atender para poder avanzar.

Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región continúa siendo la más desigual del mundo, sufre el estancamiento – e incluso el riesgo de retroceso – en los avances en la lucha contra la pobreza y el crecimiento económico, y debe enfrentar el desafío de generar una distribución más justa. El aumento exorbitante de la deuda externa, la profundización de políticas económicas de austeridad fiscal y regresivas, que concentran riqueza en unos pocos; los altos índices de corrupción en un entorno de impunidad; la violación de los derechos humanos, junto el aumento de las tendencias autoritarias, la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la represión y criminalización de la protesta y organización ciudadana son algunos de los desafíos centrales que los gobiernos deberán encarar.

Esa realidad es grave y, si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los ODS, ahora ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la eliminación de la pobreza, las desigualdades, la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030. La pandemia, que implica un cambio total en la vida de todas las personas y sus relaciones (inclusive con la naturaleza), profundiza el deterioro económico y evidencia

la debilidad de los Estados, el desmantelamiento sistemático de inversión registrado en los sistemas públicos de salud y educación y en la protección social. Es también una oportunidad para para revisar el rol de los Estados y lograr que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y colocar la vida y los derechos humanos como política de Estado. Vivimos una crisis cuyo impacto no podemos aún dimensionar. Pero tenemos esperanza de superarla a partir de un diálogo horizontal y transparente, de la puesta en marcha de transformaciones políticas, sociales, y de un cambio en los modelos de desarrollo, que incorporen a todos los actores en cada país.

#### **Nuestras propuestas son:**

1– Fortalecer nuestros sistemas democráticos y enfrentar la crisis del COVID-19 estableciendo políticas económicas progresivas, con sistemas que garanticen las medidas de prevención como el distanciamiento social. Para eso se necesitan Estados fuertes con capacidad de desarrollar estrategias nacionales y locales, que incorporen de manera efectiva las demandas y expectativas de los actores no gubernamentales, movimientos sociales y laborales, organizaciones de sociedad civil y poblaciones más vulnerabilizadas. Se necesitan implementar sistemas fiscales progresivos, equitativos y transparentes, así como mecanismos de rendición de cuentas para evitar la evasión y elusión de impuestos, la opacidad y el endeudamiento de los países. Asimismo, promover mecanismos de protección de datos, el trabajo decente, políticas para evitar el desempleo, el quiebre de pequeñas y medianas empresas, y mecanismos para garantizar una renta mínima a la población más vulnerable, especialmente en momentos de crisis como los que vivimos, evitando un mayor aumento de la pobreza y la profundización de las desigualdades. Hoy más que nunca el *“no dejar a nadie atrás”* depende de lograr un modelo de desarrollo que contenga a todas las personas y que, sin privilegios, permita que todos los sectores de la sociedad contribuyan con equidad.

2– Frenar la violencia generalizada, principalmente hacia la niñez, la adolescencia, las juventudes, las personas adultas mayores, las mujeres, la población LGBTIQ, los pueblos indígenas, migrantes, trabajadores/as (inclusive trabajadores/as sexuales y personas en situación de explotación sexual y reproductiva), las personas con discapacidades y /as personas viviendo con o afectadas por el VIH/Sida, incluidas aquellas que tienen enfermedades raras y/o crónicas. La única respuesta posible es generar un ambiente en donde la cooperación y la solidaridad, en el marco de la Agenda 2030, cuente con adecuadas capacidades, marcos normativos y recursos estatales definidos para enfrentarlos.

3– Real énfasis en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, asegurando el bienestar de toda la población, así como con leyes y políticas que atiendan las necesidades y aseguren la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Lo más importante ahora es contar con respuestas integrales y coordinadas, que refuercen el anclaje territorial de las políticas para ampliar su cobertura, pertinencia y efectividad, al tiempo que den respuesta a las múltiples necesidades y demandas de todas las personas, en toda su diversidad y en todas las etapas de su ciclo vital.

4– Implementar acciones concretas, basadas en datos desagregados, para planear respuestas bajo la perspectiva de la interseccionalidad e interculturalidad, así como políticas y programas focalizados y servicios para la reducción de las desigualdades que benefician a todas las personas. Especialmente cuando la CEPAL ha advertido que el número de personas en situación de pobreza en la región pasaría de 185 a 220 millones y que la pobreza extrema ascendería de 67,4 a 90 millones de personas en el contexto del COVID-19.

5– La crisis exige poner al Estado como un eje de desarrollo fundamental para terminar con el hambre y reducir la pobreza, garantizando un piso de protección social universal, el trabajo decente, la salud y educación laica, pública, gratuita, inclusiva y de calidad a lo largo de la vida. La crisis sanitaria nos muestra el punto de inflexión sobre la desidia y ausencia de las políticas públicas y la supremacía del mercado desregulado en la producción y distribución de la riqueza y la depredación de nuestro ambiente en beneficio de intereses económicos privados.

6– Exige contener el avance de la influencia creciente de fundamentalismos de toda índole en los espacios políticos, en la definición de políticas públicas, incluyendo en la salud y en la educación, que niegan evidencias científicas y políticas informadas, promueven desigualdades, fomentan el odio, la heteronormia, la cisnorma y dificultan la implementación políticas libres de sexismos, estereotipos de género, y la inclusión del mandato de una educación sexual integral, y otras políticas que defienden y apoyan la autonomía sexual y la emancipación de las poblaciones mayormente marginalizadas.

7– Exige que se ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de las personas Migrantes y Desplazadas por cualquier motivo y que se le garantice una vida digna; que se adopte el Programa de Acción del Decenio de la Organización de los Estados Americanos; el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la aplicación de las Directrices de la Tierra sobre Seguridad Alimentaria Mundial (ONU); que se agilice un plan para implementar la Década de la Agricultura Familiar y los Derechos de los Campesinos de la ONU; el decenio de los Afrodescendientes; que se ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; y que atiendan a las demandas del Foro Político de Alto Nivel 2019 y del Foro de Juventudes ALC 2030.

8– Exige compromiso financiero, político y legal para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030, especialmente que el derecho a la salud sea realidad para todas las personas y garantizar el pleno cumplimiento de la meta 3.8. *“Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas”*. Es un deber ético y humanitario considerar a todos los colectivos más vulnerables frente al COVID-19, como son las personas migrantes, desplazadas y refugiadas, las personas viviendo con VIH/SIDA y enfermedades crónicas, las personas con capacidad de gestar, las personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras de la salud, las personas cuidadoras (en su mayoría mujeres, niñas y adolescentes y adultas mayores) y de los servicios esenciales, los pueblos indígenas, los niños y niñas, y muy especialmente a las personas adultas mayores. Hay que dar atención también a la situación de las mujeres, niñas y LGBTI, con el aumento del riesgo de padecer violencia por la cuarentena forzosa.

9- Implica exigir que los compromisos asumidos por la cooperación internacional para el desarrollo y en particular la cooperación Sur-Sur, entre los países desarrollados y los de renta media o baja se revisen, y se activen para responder de manera efectiva al actual escenario de crisis generalizada en la región, sin abandonar los Objetivos de la Agenda 2030 y apoyando la participación de la sociedad civil.

Es hora de un nuevo Pacto con justicia socioambiental y económica para los pueblos de América Latina y el Caribe, que promueva un desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, impulse a los Estados a la acción, en concurso con las organizaciones de la sociedad civil, para resurgir de esta pandemia con nuevos modelos de desarrollo y un paradigma basado en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas las personas, de las comunidades y de la Madre Tierra.